

0463-D-04

Buenos Aires, marzo de 2002.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Eduardo O. Camaño.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente 1.843-D.-02, publicado en el Trámite Parlamentario N° 39 del año 2002.

Sin más, y a la espera de resolución favorable, hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

María L. Chaya.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1° – Modifícase el artículo 103 del Código Civil Argentino de la siguiente manera:

Termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas. Se considera tal cuando se verifique el paro cardiorrespiratorio y la cesación definitiva de la coordinación orgánica por la finalización de los procesos vitales.

La muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena ni por profesión en las comunidades religiosas.

Art. 2° – Modifícase el artículo 104 del Código Civil Argentino de la siguiente manera:

La muerte de las personas ocurrida dentro de la República, en alta mar, aeronaves, o en país extranjero se prueba como el nacimiento en iguales casos.

La certificación del fallecimiento deberá ser suscrita por un médico el que no podrá integrar el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido.

La hora del fallecimiento será aquella en que se verificaron y constataron los signos previstos en el artículo anterior.

Art. 3° – Modifícanse los artículos 23 y 24 de la ley 24.193 conforme a lo establecido y derógase el artículo 62 de la misma.

Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En nuestra sociedad la donación de órganos, a pesar de sus bondades, es un tema que provoca cierto temor y el miedo natural de toda persona humana a pensar en la muerte.

La vigente ley 24.193 tiene adherentes y otros que no lo son.

Quienes la critican por ser la ablación de órganos a donante con el corazón latiente sostienen que es un verdadero crimen y que debería encuadrarse como eutanasia activa penada por la ley. La muerte cerebral es un tema aún en discusión porque no implica per se la muerte definitiva. Numerosas personas han vuelto de ella y muchas otras han permanecido en estado vegetativo hasta el paro cardiorrespiratorio. Ejemplo de lo dicho son los casos de Karen Quinlan en Estados Unidos de América y en nuestro país recientemente del joven Rodrigo, de 14 años, quien tenía como diagnóstico muerte cerebral y hoy está vivo, rehabilitándose y volviendo a su vida normal.

Hechos éstos que deben llamarnos a una profunda reflexión y prudencia corrigiendo la normativa actual por el propio misterio que entraña la vida.

El ciudadano Aníbal Francis se dedicó a analizar este tema. Su enjundioso estudio en el libro de su autoría, *Matar para vivir*, trae fundamentación éticojurídico-religiosa y ejemplos del derecho comparado, que en nuestra opinión pueden ser receptados, en su concepto, en nuestra legislación.

Para distintos credos religiosos, especialmente el cristiano, se sostiene que toda persona humana es cuerpo y espíritu, es un ser trascendente, a diferencia de las concepciones

materialistas que aseveran que somos inmanentes.

Sabido es que la religiosidad está ínsita en todo el quehacer de la persona humana: la cultura. Dentro de ella también está el derecho, o sea legislar.

La vida es el valor axiológico supremo, superior y anterior al propio Estado. En esa inteligencia el valor vida debe ser preservado inexcusablemente desde su concepción y hasta la muerte. Parafraseando al papa Juan XXIII en su encíclica *Pacem in terris* diremos: si las leyes o preceptos de los gobernantes estuvieren en contradicción con la voluntad de Dios, no tendrían fuerza para obligar en conciencia; más aún, en tal caso, la autoridad dejaría de ser tal y degeneraría en abuso.

—A las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública y de Legislación Penal.